

Los cambios en la correlación de fuerzas permiten pensar en el 2021 con reformas importantes en la lucha contra la corrupción



Wagner sostuvo que en el régimen de Alberto Fujimori la corrupción se centralizó, y fue desde la cúspide del poder estatal que se controló y organizó a las instituciones del Estado.

¿Cómo consolidar un Estado transparente y sin corrupción al servicio del país? ¿Qué tipo de mecanismos se pueden configurar para lograr dicho fin, tanto desde el Estado como desde la sociedad civil? Estas fueron las principales preguntas que intentó responder el panel sobre transparencia, ética y corrupción. El exministro, exembajador y actual presidente de la Asociación Civil Transparencia, Allan Wagner, estuvo a cargo de la exposición principal.

La corrupción es un mal que va más allá de recibir una propina o una coima; es una degradación de la persona humana, es la pérdida total de valores, y afecta a toda la sociedad y sus instituciones. Con estas palabras, Allan Wagner

1. Conferencia magistral de Allan Wagner, presidente de la Asociación Civil Transparencia. Formaron parte del panel Eloy Munive, asesor de la Secretaría de Integridad Pública de la Presidencia de Consejo de Ministros (PCM), y Samuel Rotta, director ejecutivo de Proética. Moderó el evento Caroline Gibu, de Ciudadanos al Día (CAD).

inició su exposición sobre un tema que en pocos años ha pasado al primer lugar —junto con la seguridad ciudadana— de la agenda nacional. Tal como lo recoge Alonso Quiroz en su obra *Historia de la Corrupción en el Perú*, la corrupción ha sido un fenómeno constante en la historia del Perú: no hace distinciones entre dictaduras o democracias. Desde luego, siempre han existido casos emblemáticos de personas que han luchado contra la corrupción y la sociedad peruana ha dado muestras de poseer importantes reservas morales que permiten abrigar esperanzas de que es posible encontrar una salida a este problema. Sin embargo, como observó Wagner, en la década de los 90, la corrupción adopta una nueva forma, con la generación de una corporación constituida desde el Estado para la corrupción, el autoritarismo y la violación de los derechos humanos. “En el gobierno de Fujimori, la corrupción se centraliza, y es desde la cúspide del poder estatal que se controla y organiza a las

instituciones del Estado”, explicó Wagner.

LA CORRUPCIÓN POST-FUJIMORI

En los años que siguieron al régimen de Alberto Fujimori, la ventana de oportunidad que se abrió con el expresidente Valentín Paniagua, para impulsar reformas profundas que corrijan la situación heredada, lamentablemente se perdió. El esfuerzo se concentró, primero, en sancionar a los responsables de la corrupción de la década anterior —el presidente, los ministros, los generales—, y luego, en los gobiernos siguientes, se priorizó la economía, y si bien se registraron avances en la reducción de la pobreza, paralelamente, la corrupción en el país se profundizaba; todo esto ha conducido al Perú a la crisis institucional de hoy.

Actualmente, sostuvo Wagner, la corrupción persiste, pero es dispersa y se organiza bajo nuevas

modalidades. Lava Jato, el caso más notable, configura un perfil diferente a la corrupción de siempre: el funcionario público no es ya el agente activo de la corrupción, sino que es la empresa la que utiliza a la corrupción —sea vía sobornos o contribuciones a campañas electorales— como un mecanismo para ejercer presión sobre funcionarios públicos del más alto nivel. Otro caso emblemático, el de los Cuellos Blancos del Puerto, destaca por su planteamiento de captura del sistema de administración de justicia. “Estos casos marcan un cambio en la forma en que se ejecuta la corrupción de gran escala en el Perú”, observó Wagner. Ya la corrupción no tiene un solo origen, como en los 90, sino que son múltiples, y en el fondo de estos esquemas hay una corrupción basada en las economías ilegales y el crimen organizado, como el narcotráfico, la minería ilegal y la tala ilegal.

A pesar de “los esfuerzos fallidos” de los últimos años, Wagner rescató la Comisión Presidencial de Integri-

Eloy Munive, de la Secretaría de Integridad Pública de la PCM, señaló que actualmente se cuenta con una política pública anticorrupción, que es la principal herramienta de los Estados para enfrentar este problema.





Samuel Rotta, de Proética, resaltó los impactos positivos de la vigilancia ciudadana en la lucha contra la corrupción.

dad creada en 2017. Este grupo de trabajo realizó un informe denominado *Detener la corrupción, la gran batalla de este tiempo*, en donde se plantearon un centenar de recomendaciones. Entre ellas, destacan la obligación de que los funcionarios de los tres niveles del poder público presenten una declaración jurada de intereses, la mejora de las reglas sobre contrataciones públicas, la mejora de los mecanismos de transparencia, entre otros.

Otra iniciativa importante, explicó Wagner, ha sido la Reforma del Sistema de Administración de Justicia. El presidente Martín Vizcarra creó una comisión consultiva y, sobre la base de sus recomendaciones, presentó al país, en su mensaje a la nación del 28 de julio de 2018, un conjunto de medidas legislativas para iniciar dicha reforma. Entre ellas, destaca la modificación sustancial del Consejo Nacional de la Magistratura, que requirió una enmienda constitucional aprobada mediante referéndum, así como la creación de una Autoridad de Inte-

gración y Control en el Poder Judicial y en el Ministerio Público, con autonomía y moderno enfoque técnico, y un Consejo para la Reforma del Sistema del Justicia del más alto nivel político.

Wagner concluyó su exposición señalando que el referéndum de finales de 2018 ha marcado un

“Lava Jato, el caso más notable, configura un perfil diferente a la corrupción de siempre: el funcionario público no es ya el agente activo de la corrupción, sino que es la empresa la que utiliza a la corrupción —sea vía sobornos o contribuciones a campañas electorales— como un mecanismo para ejercer presión sobre funcionarios públicos del más alto nivel”.

replanteamiento de la agenda nacional y un importante cambio en “las relaciones entre el Ejecutivo y el Parlamento, que tal vez puedan conducir a una concertación de una agenda política que nos permita llegar al 2021 con algunas reformas importantes en materia política, económica y, en particular, en materia de lucha contra la corrupción”.

POLÍTICA NACIONAL DE INTEGRIDAD

A su turno, Eloy Munive, asesor de la Secretaría de Integridad Pública de la PCM, sostuvo que Perú actualmente cuenta con una Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, expresión del más alto compromiso para afrontar este flagelo. Precisó que la política perfecciona el enfoque de lucha contra la corrupción, pues incorpora la prevención a partir del enfoque de integridad. Bajo este nuevo enfoque, en donde el centro es la persona, Munive explicó que

se está empleando una serie de mecanismos para promover la ética en la función pública de manera aplicada, y se vienen desplegando herramientas dirigidas a empoderar el control social, fomentando la participación de la ciudadanía.

En opinión de Samuel Rotta, director ejecutivo de Proética, en Perú hay una ciudadanía desconfiada. Según un estudio encargado por Proética, solo el 7% de los encuestados tuvo la confianza para formular una denuncia ante un hecho de corrupción. “Tenemos una ciudadanía descontenta, sedienta de sangre”, acotó. “El 50% aplaudió cuando metieron a Nadine Heredia y a Ollanta Humala a la cárcel de manera preventiva, y el otro 50% aplaudió cuando hizo lo mismo con Keiko Fujimori. Hay un deseo de ver sanciones, aun cuando sabemos que no se trata de una sentencia”, dijo.

El especialista resaltó las manifestaciones ciudadanas y el activismo como una práctica importante de vigilancia y lucha contra la corrupción. En esa línea, compartió los resultados de un estudio de la Universidad de Columbia (EE. UU.) que muestran los impactos de la vigilancia ciudadana. La investigación encontró que en 100 obras municipales que fueron vigiladas por Proética, el costo promedio por obra fue S/230.000 menor al costo por obra entre 100 obras que no fueron vigiladas. En total, el país se ahorró S/23 millones en aquellas obras que

“El 50% aplaudió cuando metieron a Nadine Heredia y a Ollanta Humala a la cárcel de manera preventiva, y el otro 50% aplaudió cuando hicieron lo mismo con Keiko Fujimori. Hay un deseo de ver sanciones, aun cuando sabemos que no se trata de una sentencia”.

estuvieron bajo la vigilancia de la institución.

EL MONSTRUO POR DENTRO

Con respecto a la corrupción a nivel subnacional, Wagner opinó que uno de los grandes problemas que enfrenta el país es la escasa llegada de la Contraloría para vigilar tanto a gobiernos locales como a gobiernos regionales, así como la debilidad de los mecanismos de control interno en municipalidades y gobiernos regionales. “Es fácil que el alcalde de un distrito contrate a la empresa de un alcalde vecino, y viceversa”, ejemplificó. En el caso de los gobiernos regionales, sin embargo, Wagner estimó que se está construyendo institucionalidad.

Sobre el mismo tema, Munive manifestó que el trabajo a nivel subnacional es fundamental. En

ese sentido, la Secretaría de Integridad Pública ha identificado diferentes riesgos de corrupción, como por ejemplo la inexistencia de regulaciones claras acerca del uso de vehículos, bienes y servicios, así como el uso de correos institucionales. En esa línea, señaló que existe un Modelo de Integridad Pública, aprobado conjuntamente con el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021, y que se ha planificado un conjunto de eventos para difundir la estrategia e iniciar la implementación de este modelo. “Todos los gobiernos locales y los gobiernos regionales deben tener una oficina de integridad institucional”, concluyó.

Rotta acotó que, si bien desde el punto de vista de la opinión pública la corrupción es un “monstruo”, desde el punto de vista de las ciencias sociales la corrupción es meramente una acción social. Y como toda acción social, responde a incentivos y a subjetividades. Aclaró que las condiciones institucionales que facilitan que una persona se corrompa están contempladas en los planes de la Secretaría de Integridad Pública. “Los peruanos estamos en una zona gris con respecto a la tolerancia frente a la corrupción. Nuestras justificaciones son ‘así ha sido siempre’, ‘es que ganan poco’, ‘cómo no lo va a ayudar, si es su primo’. No se entiende que no es un favor, que está mal, que hay una línea divisoria entre lo público y lo privado”, sentenció. 🏠